

# El sistema político mexicano: la otra cara de la crisis

Pedro López Díaz

Un dato común del comportamiento de la economía nacional radica en el hecho de que éste atraviesa una profunda crisis; en ello coinciden todos los discursos políticos por hoy vigentes. El hecho mismo es tan contundente que nadie lo niega, ni aun el discurso del poder sujeto a deslegitimación por los efectos sociales que la crisis provoca. Hay, desde luego, una multiplicidad de interpretaciones en torno a los orígenes y formas de contrarrestar la postración económica. Pero lo cierto es que no hay, por el momento, una voluntad de cambio radical: no hay *disponibilidad social*, esto es, aún existe una corriente soterrada que atraviesa todos los sectores sociales, más o menos organizados, que guardan esperanzas y cierta credibilidad de que se podrá salir de la crisis conservando las reglas del juego político hasta hoy imperantes: Ello se traduce en una *limitada* voluntad de cambio de las principales fuerzas políticas del país: la fuerza gubernamental persigue una modernidad de la Nación, hacerla más capitalista por medio de una evidente política económica de corte neoliberal, usando para ello en lo fundamental, la fuerza que deviene del propio Estado, pero sus intentos no cuentan con ningún dispositivo social en el cual apoyarse seriamente. La derecha, por su lado, quiere igualmente la modernidad, pero históricamente no se encuentra preparada: en el campo económico está constituida por una clase empresarial sin la vocación del riesgo e incapaz de desarrollar una acumulación de capital que implicara profundas innovaciones tecnológicas como palanca de la productividad deseada: en lo político se expresa en la defensa del voto ciudadano que el sistema electoral conculca, pero no acaba por tener un proyecto diferente de Nación. La izquierda, por su lado, más pertinaz en su crítica de la política económica seguida, lo hace en el entramado de la

representación parlamentaria pero su debilidad social impide que su crítica se traduzca en situaciones reales de cambio. En este contexto, aparece con frecuencia la admonición de que las reacciones sociales frente a la crisis se vuelvan incontrolables, que aparezcan disturbios más allá de lo organizado socialmente. Hay un miedo pánico que todas las fuerzas políticas asumen frente a lo desconocido pero que cada vez más aparece como inminente y no obstante ello, en el fondo, todos quisieran que nada o poco cambiara, por el hecho mismo de la incertidumbre de que una vez anunciado el cambio éste se volviera ingobernable. Desde el poder se quiere un cambio donde intervenga en lo mínimo la sociedad con sus propias propuestas, pero desde la sociedad no hay fuerza alguna que por hegemonía pudiera ser alternativa real frente a lo hasta ahora hecho. Podríamos decir que se ha generado un *impasse social* que denota la existencia de un desencuentro no tan solo político, sino histórico, entre todas las fuerzas políticas y los respectivos destacamentos sociales que representan. Situaciones peligrosas, desde luego, pero que implican por primera vez, en muchas decenas de años, la posibilidad misma del cambio una vez trastocados y fisurados los mecanismos de control de todo el andamiaje social. Pieza clave de esto lo es el sistema presidencial que se dispone a pasar una prueba más de su operatividad en una de las situaciones más desfavorables de la historia política de la posrevolución. A ello le dedicamos nuestra principal atención en este escrito.

### 1. Las ataduras estatales de la sociedad mexicana

Si algo produjo la revolución fue el entrecruce de dos tendencias sociales: la primera, la disolución

de las ataduras al desarrollo del capital en el campo y la liberalización de las diversas categorías sociales de los centros urbanos que les permitió su libre organización a efecto de establecer más plenamente la relación entre el trabajo y el capital, es decir: la organización de los grandes sindicatos obreros, por un lado, y la fundación de las cámaras empresariales, por el otro. Segundo, lo anterior se dió a partir de un dato elemental: ambas clases sociales no se encontraban lo suficientemente desarrolladas como para establecer sus relaciones al margen de la *centralidad estatal*, de ahí que, una buena parte de la modernidad buscada, se va fincando y desarrollando a partir de un movimiento envolvente del Estado en relación con la sociedad. El capitalismo tardío de la nación se entrecruza con los rasgos y mecanismos más innovadores del capitalismo de los países centrales; es decir, con la emergencia del *estado benefactor*. En el primer caso, el Estado se convierte en hacedor e impulsor del capital; en el segundo, el capital cede ante el Estado para conservar al sistema en su conjunto.

El *hecho constitutivo de lo estatal* en la sociedad mexicana deviene de innumerables impulsos: de pactos políticos, de concertación de fuerzas sociales; de abierta o soterrada represión, por lo que no fue unívoco ni mucho menos lineal. Acaso sería una exageración afirmar que el momento o momentos constitutivos del hecho estatal, se encarnan en una suerte de combinaciones contradictorias de actores sociales: obreros, campesinos, sectores medios, y estratos de la burguesía que intentan, por diversos caminos y en diferentes etapas, crear sus propias organizaciones de representatividad en la sociedad civil pero nunca pudieron lograrlo a plenitud, esto es, con cabal autonomía, en tanto que terminaron por constituirse en *mecanismos de me-*

*diación semi-estatal*. El estrato social que salió favorecido de esta suerte de derrotas sociales, de esta incapacidad de autorreconocimiento parcial de la sociedad civil, al margen del Estado, lo constituyó una emergente y vigorosa burocracia política con una consistente capacidad de autorreproducirse con relativa estabilidad y con la habilidad suficiente como para concitar el consenso social para gobernar. Mientras más se ampliaba al Estado, por los requerimientos propios del desarrollo económico, mayor era la articulación del *hecho estatal* con el conjunto organizado de la sociedad civil. El comportamiento y *manera* de ser corporativa de la burocracia en su conjunto, se constituyó en un momento riguroso de maduración para el conjunto de los liderazgos y organizaciones de las diferentes clases y estratos sociales con presencia significativa en el cuerpo de la sociedad civil. El movimiento social de diverso signo, como expresión de inconformidad o como forma de presión para el cambio fue proscrito de la práctica política y sustituido por un complejo sistema de intermediaciones y negociación, donde los principales protagonistas pasaron a ser los *liderazgos corporativos* de las dos clases fundamentales de la sociedad mexicana. La articulación de éstos con los altos mandos de la alta burocracia política pasó a constituir el *sistema político real* de la sociedad mexicana. Es posible que, en esta perspectiva, se pueda tener una mayor claridad de lo que podría denominarse un sistema político dual, donde tiene vigencia también un *sistema político formal*; constituido por la totalidad de los partidos políticos y la forma de representatividad que se deriva de un sistema electoral que ha sufrido con el transcurrir del tiempo diversas modificaciones. Con el agregado, a esta situación, de la existencia de un partido político mayoritario estructurado o confor-

mado de manera corporativa, esto es, con una adscripción forzosa en su seno de organizaciones sindicales y profesionales de todo tipo. El panorama hasta ahora descrito quedaría trunco sin el eje vector que articula los dos sistemas políticos y es la institución presidencial; *la expresión o forma concentrada de la sociedad civil del Estado*.

## 2. Movimientos sociales y estabilidad política

La virtud de la estabilidad lograda, por medio de este peculiar sistema político, se convierte en extrema debilidad cuando el sistema de jerarquías corporativas es acosado desde el exterior, o si se quiere, desde su propia base social. Diversos movimientos sociales con mayor o menor expresión política que se han sucedido en las últimas decenas han dado prueba de la *debilidad orgánica* del sistema, en la medida en que han lesionado o fisurado los liderazgos establecidos: tan sólo recordemos el movimiento de ferrocarrileros y maestros a finales de los cincuenta; el movimiento estudiantil del 68, y a últimas fechas un sinnúmero de movimientos urbanos que se dan en el seno de las capas marginales de los grandes centros ciudadanos, no se diga los movimientos frecuentes, aunque de naturaleza local, de campesinos y jornaleros víctimas de los reacomodos y cambios generados por el desarrollo del capital en el agro. Estamos hablando, pues, de movimientos sociales que derivan o se gestan en dos espacios diferentes: aquel que constituye la base social permanente que nutre las diversas corporaciones de la sociedad civil y que en un momento dado, por circunstancias concretas de diverso signo, se rebela frente a sus tradicionales liderazgos y opta por demandas que en el fondo implican la definición de una mayor auto-

---

nomfa bajo la óptica de la necesidad de la democratización de sus vetustas y rígidas estructuras: el otro campo; tiene como definición *lo no organizado, lo marginal*, lo que no ha podido ser organizado y adscrito a la norma del control estatal y que tiende a organizarse y demandar por propia iniciativa. El hecho real, es que ambos tipos de movimientos sociales, sin quererlo, o sabiéndolo y apostando a una nueva alternativa, sacuden con fuerza a lo ya organizado jerárquicamente, tienden a cuestionar en su base el *consenso pasivo* del que goza el sistema político mexicano.

Estamos hablando, pues, de lo inesperado, de lo que difícilmente puede programarse, de lo que difícilmente puede ser acogido por el sistema político, de lo que surge y desaparece con tanta fuerza vital que sacude violentamente las buenas conciencias de los políticos profesionales de la nación, tanto de derecha como de izquierda. Es el mundo de los no o mal representados que sin cronométrica precisión emerge periódicamente como masa social amorfa, pero con consignas bien definidas por elementales que éstas pudieran ser. De esta periódica irrupción de la *masa excluida* han devenido los movimientos sociales que han sacudido al país en los últimos años. La masa como movimiento apropiándose de la política, trae tras de sí la conciencia de su propio poder y esto es lo que no puede ser permitido por el establecimiento político, precisamente por lo que rebasa, en tanto fisura las jerarquías, porque tritura los campos de la componenda y termina por desquiciarlo todo. Si acaso fuere cierto que el actual sistema político ha entrado en una soterrada crisis que lo abarca todo: desde la representatividad formal, pasando por el consenso social, hasta la ideología del nacionalismo revolucionario, como aceptación del poder establecido por la conciencia empíri-

ca de las masas, entonces es de creerse y aceptarse la presunción de que una parte del cuestionamiento y radical oposición al sistema político provendrá o se expresará en la fuerza de inéditos movimientos sociales con propuestas autoorganizaciones y de ejercicio democrático de su representación, que poca cabida tendrán en el sistema tal y como él existe hasta ahora. Todo el mundo habla de la crisis, de que el país ha empezado a cambiar, pero todo el mundo se sacude en su intimidad por el miedo pánico que despierta lo previsible del conflicto social en ciernes. No es que se trate de una visión apocalíptica o de un voluntarismo a ultranza, lo cierto es que estamos hablando implícitamente de la historia política de la Nación, de cómo ha transitado su modernidad a saltos de rebeldía de masa y de represión abierta en sus momentos más álgidos y ello a pesar de la enorme fuerza que deviene de uno de los Estados más orgánicamente estructurados del occidente capitalista.

### 3. Sistema político y crisis de representatividad

La *representatividad* como delegación de poder en los liderazgos políticos tiende a constituir una ficción al interior del sistema político mexicano. Preguntas elementales de quién representa a quién y cómo lo representa, empiezan a ser cuestionamientos que emergen en los espacios políticamente excluidos, así como en los espacios formalmente adscritos al sistema de representación, social, económica y política en tanto soporte formal y real del poder. Si hablamos de aquella representatividad que deviene de la decisión consciente del ciudadano y que se expresa a través del voto, lo cierto es que en los últimos treinta años, el presente implica uno de los

momentos de menor representatividad del poder político establecido; la contabilidad electoral de la abstención ciudadana lo demuestra sobradamente. A pesar del control corporativo de grandes sectores de la población, el hecho real es que se ha empezado a desarrollar ampliamente un proceso de *deslegitimación* del sistema político mexicano. Y quienes más tuvieron en el pasado son los que más pierden en el presente. La negativa a ejercer el voto es la expresión salvaje y primitiva pero real, instintiva pero elementalmente racional, de una masa social que si bien no está en movimiento, no está dispuesta a ofrecer ni tan siquiera un *consenso pasivo* al ejercicio del poder por el grupo gobernante actual, cuya fuerza tiende a devenir cada vez más del aparato estatal y cada vez menos de un relativo consenso activo.

Pero hay una óptica diferente para constatar la crisis de la representatividad y es aquella que viene de los propios sectores sociales adscritos corporativamente al sistema político mexicano: obreros, profesionistas y campesinos por tan sólo aludir a algunas categorías sociales. Los liderazgos que ejercen la representatividad estamental y jerárquica de estos sectores, parece ser que tuvieron amplio y obligado consenso, en tanto el desarrollo económico del país propició conspicuo enriquecimiento y relativo bienestar social. Pero no es un problema sólo de economía, lo es también de cultura, de educación, de expectativas y por qué no de activismo político. Lo cierto es que los liderazgos sindicales, profesionales, culturales, gremiales, aunque ello parezca paradójico, representan cada vez menos los intereses más inmediatos de sus representados, al mismo tiempo que estos liderazgos cuentan cada vez menos en el privilegiado seno del grupo gobernante en tanto son, ya ahora, *liderazgos agotados*

de tanto transitar en los laberintos del poder, sobrada y abúlicamente aburguesados en el peor sentido del término, incapaces de establecer distancias para reagrupar por medio de la lucha a quienes representan: su política se reduce a un discurso repetitivo, restrictivo, poco efectivo y ni tan siquiera efectista. Con el devenir del tiempo en sus palaciegas alcobas, terminaron por olvidarse que la fuerza de su representatividad finalmente deviene de la masa que en ellos delega y no de la mísera cantidad de puestos públicos y representaciones camarales que ahora ocupan. La crisis, en esta perspectiva, radica en la separación tajante entre los liderazgos sociales de todo tipo, de su debilitada fuerza y una capacidad de convocatoria poco utilizada, y su expresión de *representatividad política*. Sin desmesura, ésta es quizá, una de las claves para entender las crisis en ciernes del sistema político mexicano: la fractura soterrada de la relación orgánica del vetusto Estado de la posrevolución y los núcleos más neurálgicos y receptivos de la sociedad mexicana. Y para entender ello con mayor claridad, sería un error no aludir al *partido de estado* como pieza clave del sistema y como eventual espacio de la crisis misma.

#### 4. El PRI y los límites del reformismo

El partido de Estado, como partido mayoritario es, por ahora, la pieza clave del sistema político mexicano, es más que una agencia electoral del gobierno y es menos que un partido en el poder. Constituye el *eje político* de articulación entre masas y Estado, aunque a decir verdad esta vinculación está mediada por una representación *corporativamente jerarquizada*, a través de una capa de liderazgos sociales que se asientan o sustentan sobre un amplio consenso

pulsos del exterior. La crisis actual, tan sólo es el escenario de un proceso que viene de atrás y que también se expresa en una *reconversión del grupo gobernante*, llamémosle de una tardía modernización. Hablamos de un Estado cuya *centralidad gubernamental*, le permite cambiar el estilo, la forma, si no es que el mismo contenido de su sociedad civil: de su cuerpo selecto de burócratas. El origen de los mismos, no tiene más lugar en el campo primigenio de la representación social directa, deviene más de los propios mecanismos del andamiaje estatal; el Estado y más en particular: el gobierno, reproduciéndose a sí mismo, sin la necesidad de la sanción popular que consigo trae el voto. Con ello, tiende a cambiar el *perfil* de la alta burocracia política cuyo respaldo más evidente se encuentra en el *saber adquirido*, en la capacidad técnica de administrar; *la técnica como síntesis de la política*.

La modernidad en la política ha implicado, valga la expresión, una división social del trabajo al interior de la clase política: aquellos quienes toman las principales decisiones en la dirección del Estado, y aquellos que ejercen los liderazgos sociales y la representación parlamentaria, constituyendo así, lo que podría denominarse, el campo plebeyo de la burocracia estatal. La capilaridad social dentro del Estado tiende a clausurarse: *su sociedad civil se ha estamentalizado*. La militancia partidaria, en consecuencia, se ha vuelto innecesaria para ocupar los altos puestos de la burocracia política. El gobierno menos necesitado del impulso popular para dirigir el Estado. El Estado para sí, y el gobierno para el Estado. He ahí la circularidad perfecta para que un gobierno pueda prescindir de la sociedad. En síntesis: una reforma en la contrarrevolución. Inaudita paradoja del sistema político mexicano. El Estado y su gobierno reformándose en una sociedad que

dirige como si permaneciese igual que treinta años atrás. Como resultado de todo ello, a su manera, el nuevo grupo gobernante se moderniza, al mismo tiempo que quiere y desea que la sociedad política también se modernice. Exige y postula menos Estado y más gobierno, pero no sabe o no puede deshacerse del sistema político establecido: de su corporativismo, sin tocar las ataduras del clientelismo político. Quisiera ver a los obreros cumplir su labor económica pero sin mayor ingerencia gubernamental, ni tan siquiera a través de su casta burocrática. Se da cuenta que ello atentó ya contra la modernidad del capital, al mismo tiempo que no puede ofrecer o armar nada a cambio, en tanto no tiene en su seno ningún liderazgo social directo: tan sólo representan y son el alma del Estado y nada más tienden a dominar el gobierno pero se separan cada vez más de la sociedad. La paradoja actualmente es que nunca antes hubo un grupo gobernante tan fuerte estatalmente pero tan débil socialmente. Mayor signo premonitorio de la crisis del sistema político mexicano no lo puede haber. Sin que el sistema deje de ser burgués está obligado a reformarse, con una salvedad, que los límites de la reforma desde arriba están agotados históricamente, lo que puede venir desde abajo es imprevisible pero necesario y tiene tan sólo dos más: la reforma —de nueva cuenta— o la revolución; no importa cómo ella puede denominarse, pero lo cierto es que ella tiende a arrasar con todo, frente a ella las apuestas se vuelven inciertas: *se dan y nada más*.

## 6. La clase dominante y el Estado

La historia política de la Nación que se construye a partir de la revolución mexicana arroja un saldo

evidente: la clase dominante nunca ha llegado a ser a plenitud clase gobernante: ésta es su gran tragedia histórica; el gran desencuentro político con el Estado que le ha servido pero no obedecido de manera puntual. La historia de tal desencuentro ha sido larga y tortuosa, cuando no escabrosa. Pero lo que aquí nos interesa señalar es la peculiar presencia de la clase dominante en el sistema político mexicano. Digámoslo de manera sucinta: su participación no pasa o atraviesa el *lobby partidario*, si no es más que para llegar al acuerdo de que algunos de sus miembros que ejercen determinado liderazgo empresarial ocupen alguna silla en el parlamento. El resto de la vinculación entre clase dominante y Estado se da a partir de una relación *directa y orgánica* a través de las cámaras y confederaciones empresariales de todo tipo. Negociaciones y acuerdo aparecen relativamente ocultos ante la opinión pública, salvo cuando aparece el desacuerdo. Estamos frente a una clase dominante que ejerce una suerte de *política clandestina* y ello en la medida en que el grupo gobernante tal y como ha dirigido el país le ha sido funcional al extremo. Aunque en las actuales circunstancias, tal parece ser que dicha relación se encuentra ante ciertos límites que se hace necesario remover. Ello se puso en evidencia con la nacionalización del sistema bancario, al quedar despojado de sus propiedades y funciones el sector hegemónico, hasta ese momento, de la clase dominante. El poder económico encontró así, un límite evidente en el presidencialismo mexicano. Los sectores más fuertes del empresariado mexicano le han retirado una parte de su confiabilidad, por no decir consenso, a la forma en que el grupo gobernante se maneja y en función de ello; las cámaras y confederaciones patronales, han tendido a rebasar los asuntos propios que la ley les confiere, al

transformarse paulatinamente en claros *grupos de presión política*, cuando no de evidente impugnación. No sería aventurado decir que se han convertido en *partidos puros de clase*, sin ser partidos políticos, a la manera tradicional. La fusión de gremialidad y política, en su caso, no está lejana de aquella que se da en relación con el sindicalismo oficial, guardando las distancias y diferencias propias. Esta actuación, *de facto*, modifica las reglas del juego del sistema político, aunque no puede dejarse de señalar el proceso ya muy definido de la abierta militancia de derecha de algunos de los personeros de la clase empresarial. Lo más lógico sería suponer un escenario político, donde se expresara la militancia política de los empresarios, con mayor fuerza, en los dos partidos más importantes, pero en el caso del PRI, ello tendría que darse a partir de profundas modificaciones en su forma y estructura y ello implicaría, necesariamente, un reordenamiento de las alianzas de clase. Es evidente que no estamos hablando simplemente de un futuro posible, sino más bien de una necesidad política a que está obligada la clase dominante, para interferir e influir en la conducción gubernamental de manera más directa y más allá de la simple consulta. No estará por demás señalar que el *aggiornamento* del grupo gobernante va precisamente al encuentro de satisfacer esta necesidad, pero el meollo del problema radica en que aún no sabe cómo llevarlo a cabo, pero lo cierto es que no lo puede llevar a cabo sin una modificación sustancial del sistema político actual.

### 7. La oposición y su encarcelamiento parlamentario

Hablemos de lo que más nos interesa, por el momento, la oposición de izquierda. Es un hecho co-

nocido que su participación política es legalizada a partir de dos reformas políticas que encuentran su principal *centralidad* en la cuestión *electoral y parlamentaria*. Si algo hay que registrar es la procedencia o estilo político de actuar de los diferentes destacamentos que incursionan en la vía parlamentaria y es su vinculación, aunque débil, a los movimientos sociales, tanto urbanos como del agro mexicano. Movimientos, en primera instancia, contestatarios y que por su naturaleza de exclusión de la legalidad son permeados por una buena *dosis antiestatalista*. Su sobrevivencia, en mucho se debe a su clara definición frente al Estado, al mismo tiempo que ello explica, parcialmente, su debilidad. En realidad, la *estructura corporativa* del sistema político, que no ha dejado de ser tal, en mucho dificultaba cualquier acción política que se desarrollara al interior de las capas sociales adscritas a los mecanismos de control tanto del partido mayoritario como del propio Estado. Las limitaciones de la democracia hacían inviable el fortalecimiento fácil de una *izquierda marginal* en el sentido estricto de la palabra. Pocos eran los reductos sociales donde ella podía actuar sin estar sujeta a la represión o acosamiento directo. Uno de ellos —las Universidades—, le permitió tener una relativa ascendencia en las fuerzas de la cultura, lo que potenció, sin lugar a dudas, su discurso político.

Desde luego, la legalización de la izquierda no es un hecho gratuito del poder; es resultado, en parte, de una *prolongada* lucha por sus derechos políticos. Sin embargo, conviene señalar que a mayor desgaste del poder mayor necesidad de una *relegitimación* del sistema político, introduciendo en su seno nuevos interlocutores, al mismo tiempo que se queda sin tocar su fuerza más desgastada y cada vez menos operativa: el *partido de Estado*. Se podría

afirmar que la reforma política se ha quedado a las puertas de ese partido y si eventualmente algo ocurriera a su interior, los impulsos de su renovación devendrán necesariamente de los desacuerdos y conflictos que se generan a su interior, lo que hace improbable una reforma desde arriba: ¿cómo hacerla y en qué sentido? Esto parece estar, por lo pronto, fuera de las posibilidades del grupo gobernante, a no ser que se asuma un riesgo de incalculable repercusión. Acaso sería una *enfática* afirmación, el hecho o idea de que el *reformismo autoritario*, se enfrenta a evidentes límites históricos de la Nación. Y ello nos obliga a evaluar la posibilidad del reformismo que provenga de impulsos sociales y voluntad política de otro signo. En este caso, la izquierda parlamentaria, tal parece ser, se empeña en poner a prueba su capacidad en esta dirección. Replanteamos tal problemática en otra perspectiva. Es evidente que las *coyunturas políticas* constituyen síntesis temporales de confluencia y conflicto de muchos actores sociales, tanto institucionales como marginales. La paradoja de la izquierda es que buscando una alternativa y luchando por ella —su legalización— lo logra en un momento de su historia en que empezaba a plantearse a su interior serios cuestionamientos en torno a sus tradiciones, a sus formas organizativas, al tipo de vinculación con su entorno social, a sus paradigmas ideológicos, a la naturaleza de los nuevos actores sociales emergentes en el último periodo del desarrollo capitalista de la Nación. Esta reflexión crítica sobre sí misma, sobre su pulverización organizativa, sobre su tradicional dogmatismo se compagina con una situación objetiva de debilidad social, de su reducida capacidad de convocatoria y ello sin menospreciar, los cambios de calidad que se estaban generando en su discurso ideológico-político. Su incursión parla-



mentaria se da pues en el contexto de una educación: *relativa fortaleza política y extrema debilidad social*, aunque ello por sí mismo parezca o sea paradójico. Si bien es cierto que aún no logra hacer una evaluación crítica de tal situación, no olvidemos que en esta *impasse*, se despierta una legítima vocación por fortalecerse a través de la unidad orgánica, lo cierto es que no ha logrado vincular su ancestral identidad de fuerza radical de oposición con la refinada técnica parlamentaria de su actuación. Si bien su discurso se vuelve audible en el entorno de la sociedad política, no deja de llamar la atención que tal discurso carece de fuerza social: su impugnación no logra traducirse en factor real del poder. El hecho real es que la izquierda se ha ensimismado en

el espacio parlamentario, momentáneamente se ha perdido en el tira y afloja del cabildeo gubernamental, aunque no es de dudarse que en tal práctica ha adquirido experiencia y habilidad de negociación y por qué no decirlo, madurez propositiva en torno al enmarañado juego de la política económica. Sin tener el poder se ha entrenado para ejercerlo técnicamente, aunque éste no puede reducirse a esta sola dimensión, ¿acaso no habrá llegado al límite posible, en las actuales circunstancias, de su vocación parlamentaria? Creemos que ello es así y que su actuación política, fundamentalmente, debería volcarse de nueva cuenta a los entornos sociales donde deviene su fuerza real aunque ya menguada, y ello pasa —por cierto ya en crisis— del sistema burgués de la Na-

Gerardo Aguilar



ción. Pero digámoslo de otra manera, acertadamente la izquierda ha convertido a la lucha por la democracia en lo más importante de sus consignas políticas. La democracia como el principal antídoto frente al autoritarismo vigente en la Nación. Si bien el autoritarismo es más visible en la figura que reviste la cúpula del poder gubernamental a través del presidencialismo, lo cierto es que la base del autoritarismo reside en la articulación del Estado mexicano con las masas sociales, organizadas o no. La vocación autoritaria no sólo es una forma del ejercicio del poder público, es una práctica intrínseca de la vida de las organizaciones sociales, esto es, un dato cultural y de conciencia social que todo lo permea; aun la vida interna de las organizaciones de izquierda. El Estado ha impuesto sus jerarquías en cultura política, su *modus vivendi* a una buena parte de la sociedad civil, no se diga a la sociedad política. Nos atreveríamos a decir que en este contexto las dificultades más importantes no residen, en primera instancia, en la democratización del sistema político formal de la Nación mexicana, ello parcialmente se ha logrado en las organizaciones de masas que le dan su sustento, sin descartar universidades, asociaciones profesionales de todo tipo, asociaciones comunitarias, ejidos y desde luego, la propia fábrica; la vieja y siempre renovada fortaleza del capital. La democracia bajo esta connotación sólo puede ser alcanzada a través de una *profunda reforma cultural* de la Nación, éste, creemos, es el verdadero reto de la izquierda y ello pasa, igualmente, por su *radical renovación*. La mejor alternativa es aquella que apunta y emerge de la *vinculación de cultura y masas*, es un grandioso reto que pone por su propia naturaleza, en cuestionamiento todo el sistema político mexicano. El problema actual es si la izquierda se encuentra o puede estar en *estado*

*de disponibilidad* para afrontarlo. Alguien diría, ahora, que estar fuera del Estado es estar fuera de la política, pero estar al margen de la sociedad es suicidio político.

#### 8. ¿Y la sucesión presidencial?

En tiempos pasados y recientes el presidencialismo mexicano de ser una realidad se convirtió en un mito. La deslumbrante magnificencia del poder, la humana encarnación no sólo del gobierno sino del Estado mismo. La virtud y la paciencia, el adocenado equilibrio y el adecuado estilo de gobernar, encuentran su realizada y casi perfecta expresión en la jefatura neta de la Nación mexicana. Todo puede sintetizarse en la figura: la sublimación del poder, el patrimonio de la Nación, el liderazgo institucionalizado de las masas, la necesaria reconciliación de las clases sociales, la jefatura del Estado y del partido mayoritario, la otredad de aquello que no admite equivocaciones y la encarnación de la masa en el Estado. Esto y mucho más, por no decir todo. Alguien diría: el hombre tan sólo es el *pretexto de la institución: ella es lo que verdaderamente cuenta*.

Dejemos la metáfora y asumamos el hecho real que por sí mismo no deja de ser fantasioso cuando no sublime. Es evidente ya ahora, que bajo la égida estatal, en la historia de la posrevolución, se recrearon las clases sociales, se renovaron las instituciones de la sociedad civil, y se engendró una amalgamada ideología social donde revolución y nación confluyeron en la existencia de un Estado casi sin límite alguno: las clases sociales como protuberancia del Estado; la razón del Estado como la conciencia enajenada de las clases sociales; todo un andamiaje capaz

de resistir y sobrevivir por sí mismo; la prueba del tiempo encarnada en la historia. Y a pesar de todo, la sociedad creció y maduró por sí misma, a partir de la escasa savia que el Estado le dejaba para sí: la virtud de la presidencia se trastocó en la miseria de la sociedad. Con el transcurrir del tiempo la presidencia se aristocratizó y renunció a su procedencia plebeya producto de una revolución: de la dirección política pasó a la administración de la política; del arte de la política a la técnica del Estado. Sin lugar a dudas la Nación creció en necesidades, en expectativas, en posibilidades, y la presidencia se achicó, se volvió incapaz de resolver por sí misma lo que ahora demanda la Nación. Si algo corroe al sistema político es la falta de confianza, no sólo de los de abajo, sino también de los de arriba. La presidencia como sustitutivo de los liderazgos se ha vuelto liderazgo sustituible. Nadie quiere, ya ahora, que un hombre decida el rumbo de la Nación, aunque la rebeldía por ahora es más soterrada que abierta, más clandestina que legal, más moral que política. El consulado aplastando a la república, la república sojuzgada por la aristocracia burocrática se ha convertido en la principal traba a la democracia que la Nación necesita. Todos quisieran un Presidente para sí, lo que implica que la hegemonía presidencial no le es suficiente al conjunto. El dilema de menos Estado y más gobierno rompe el equilibrio del sistema político actual, si el Estado viene a menos y el gobierno viene a más, entonces este último se vuelve más apetecible menos de consenso y más de ficción. La disputa presidencial se da ahora, en el contexto de una real disputa por el poder: sálvense quienes puedan y quédense los que puedan: los poderes reales rebelándose contra el poder formal. Con el transcurrir del tiempo la economía creció y se diversificó y por consecuencia emergieron inte-

reses específicos de los diversos sectores de la clase empresarial y frente a ello una sola mediación, una sola representatividad —la presidencia— resulta obsoleta, resulta insuficiente, no puede satisfacer, con ciertos equilibrios, más al conjunto y no sólo de la clase dominante sino de la sociedad entera. No sería exagerado decir que los empresarios están interesados en una suerte de *democratización de la cúpula del poder*: desean que sus personeros directos o indirectos, realmente tomen decisiones o empujen hacia ellas y para ello, sería secundario en qué partido político eventualmente pudieran militar, lo importante es que se sentirían y serían representados *directamente* por el poder gubernamental: el *lobby* parlamentario les es insuficiente ya. La inminente sucesión se enfrenta ya a este obstáculo que cada vez más será mayor. Aunque lo cierto es que la clase empresarial aún no logra traducir al campo de la política, un proyecto propio, aunque ya encontrarán las formas adecuadas y sin que ello quiera decir que este proceso tenderá a ser un simple reacomodo. La traducción de lo económico como poder en lo político, en el caso mexicano, pasa por la descorporativización de las asociaciones empresariales en su relación con el Estado, esto es un problema de voluntad política y de enfrentamiento coyuntural, más que de concertación palaciega, y ello lo saben muy bien los empresarios, sobre todo a partir de la nacionalización de la banca: el enfrentamiento económico que ello causó se traducirá en desencuentro político: *en autonomía empresarial*.

La sucesión presidencial como mito deviene de ser a la vez un ritual político, una puesta en escena donde los actores principales lo son: el presidente y una parte de sus colaboradores más cercanos y nadie más, el resto de la sociedad política sólo es el escenario social frente al cual el ritual tiene lugar.

Sin complicar demasiado las cosas diríamos que la fuerza del presidencialismo mexicano deviene no sólo de los poderes que la constitución misma delega en el ejecutivo, sino también de la forma corporativa de la relación entre el Estado y la sociedad que de mil maneras se manifiesta en la existencia de un partido de Estado mayoritario; en la adscripción forzada de las organizaciones sociales más importantes del país a su estructura interna; en una significativa presencia del Estado como *capitalista colectivo* en el campo de la economía; en una abultada y creciente burocracia producto de la ampliación del Estado en el periodo de la posrevolución y quizá en lo más importante de todo, en una rigidez jerárquica de liderazgos institucionalizados de las organizaciones sociales y gremiales de la sociedad civil, que niegan la posibilidad del juego democrático entre tendencias y posiciones al interior de estas organizaciones, lo que constituye la base del consenso autoritario, a partir del cual se ejerce el poder y se centraliza en la institución presidencial. Todo lo que abajo pueda moverse, todo lo que abajo pueda independizarse, todo lo que abajo adquiera relativa autonomía, todo lo que fisure la atadura estatal de la organización social, cualquiera que ella pueda ser, pone en serio cuestionamiento esta *centralidad del poder* y ello hace comprensible su brutalidad de respuesta en aquellas circunstancias en que logran emerger movimientos sociales que tiendan a expropiar la política para sí. Se podría esperar que en el contexto de la crisis económica actual, las condiciones para una irrupción de movimientos sociales de fuera y dentro del sistema político está a la orden del día, aunque por lo pronto ello no se hace aún visible. El conflicto se hace más evidente al interior mismo de la clase

dirigente, en tanto al tenor del desarrollo económico y social, ella ha crecido y visto diversificar sus intereses tanto inmediatos como de largo plazo y ello no encuentra concordancia con el evidente proceso de cerrazón del actual grupo gobernante. La capilaridad social dentro de las propias estructuras del poder gubernamental, ha dejado de ser condición para futuros reacomodos de real significación al interior de la clase política, en tanto la fracción financiera que ahora ocupa los altos mandos, al menos así parece, tratará por todos los medios de mantener sus posiciones a contrapelo, frente al resto de la alta y media burocracia. El conflicto en ciernes que ello provocará, eventualmente se expresará en un intento de continuidad, sin claras reglas de juego, en la *disputa* por la presidencia de la República. Políticos en el pasado marginados y que no ven perspectiva alguna de regreso al poder; líderes sindicales que no ven atendidas sus demandas y en evidente desacuerdo con la política económica llevada a cabo por el grupo gobernante; clases medias inconformes cargándose a la derecha a través del voto; una capa intelectual más crítica y reticente a mantener sus vínculos orgánicos con el Estado; capas sociales marginales que pierden aceleradamente la expectativa del ascenso social; una oposición más consciente de su incapacidad parlamentaria para influir *realmente* en las grandes decisiones de la Nación, se conjugan a la vez como para configurar una situación social y política poco favorable para una sucesión presidencial a la vieja usanza. Estamos tan sólo viviendo el preámbulo de lo inesperado, de lo fortuito, de lo necesario, que tendrá que irrumpir en el seno de una Nación burguesamente envejecida. 